

URUGUAY: NIVEL 2

El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo. El gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2. Estas medidas incluyen condenar a ocho tratantes, abrir un nuevo centro de atención para víctimas y lanzar mayores campañas de concientización pública. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. Funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no tuvo servicios adecuados para las víctimas ni ofreció acceso constante a refugios. A pesar del aumento en las condenas, las medidas para procesar tratantes siguieron siendo insuficientes. Algunas víctimas se negaron a participar en los juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.

RECOMENDACIONES PRIORIZADAS:

Brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas, incluidas aquellas que se encuentran fuera de la capital. • Aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales para identificar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, particularmente entre trabajadores extranjeros y personas que participan en actos sexuales comerciales. • Asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata de personas y aumentar los fondos asignados a servicios para las víctimas. • Crear un centro al que puedan acceder las víctimas mientras los refugios están cerrados durante el día. • Ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción, incluida la formación vocacional. • Buscar indicadores de trata de personas entre trabajadores extranjeros, incluso mediante inspecciones a bordo de buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto. • Investigar y enjuiciar con firmeza casos de trabajo forzado, actos sexuales comerciales forzados y trata infantil con fines de explotación sexual. • Dictar sentencia para tratantes condenados con penas adecuadas, que deberían implicar períodos de encarcelación importantes. • Reforzar la ley de trata de 2018 mediante capacitación a jueces, funcionarios policiales y fiscales sobre la irrelevancia del consentimiento inicial para ejercer la prostitución, así como sobre otras formas de coacción no física. • Revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas. • Estudiar la aprobación de normas que obliguen a los buques pesqueros extranjeros a registrarse en el país y regirse por las leyes laborales uruguayas como consecuencia de los indicadores de trabajo forzado informados. • Financiar la aplicación de la ley contra la trata y el plan de acción nacional. • Garantizar la seguridad de las víctimas que participen en los juicios contra sus tratantes según lo requiere la ley, e informar a las víctimas sobre las medidas de protección disponibles. • Poner en funcionamiento una base de datos centralizada para sistematizar estadísticas oficiales sobre diligencias para hacer cumplir las normas contra la trata de personas e identificar a las víctimas. • Mejorar la cooperación internacional para investigar casos y proteger a víctimas extranjeras.

ENJUICIAMIENTO

Hubo un leve aumento en las diligencias por parte del gobierno para someter casos a la justicia. El artículo 78 de la ley de migraciones, promulgada en 2008, penalizó la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y estableció penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas fueron lo suficientemente severas y, en lo que refiere a trata con fines de explotación sexual, fueron acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación. Las penas se incrementaron de un tercio a la mitad si el delito de trata involucraba a una víctima menor de edad. A diferencia de la definición de trata vigente en el derecho internacional, la ley estableció que el uso de violencia, intimidación o engaño sean agravantes y no elementos esenciales del delito. El gobierno no recopiló datos globales sobre su trabajo para hacer cumplir las leyes contra la trata de personas y no tuvo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial. En 2019, el gobierno inició 18 investigaciones de trata: 11 por trata con fines de explotación sexual y 7 por trata con fines de explotación laboral. Hubo 17 en 2018 y 10 en 2017. El gobierno informó que hubo 4 formalizaciones en 2019; anteriormente hubo 4 procesamientos en 2018 y 23 en 2017. Hubo dos formalizaciones adicionales por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. El gobierno informó que se condenó a ocho tratantes, cuando no se había condenado a ninguno en 2018. En los 6 años anteriores, el gobierno condenó a 5 tratantes de un total de 43 investigaciones y 52 procesamientos. El gobierno informó que se condenó a dos tratantes adicionales acusados de proxenetismo, pero no quedó claro si estos casos se ajustaban a la definición de trata vigente en el derecho internacional. Jueces dictaron sentencias de entre 18 y 22 meses de reclusión para 3 de los 8 tratantes. El gobierno no proporcionó datos sobre las sentencias de los otros cinco tratantes condenados. En Montevideo, dos unidades de violencia basada en género de la Fiscalía General de la Nación se centraron en investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil. No hubo unidades especializadas afuera de la capital. Las autoridades no informaron la existencia de investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios públicos cómplices de delitos de trata de personas. El gobierno hizo gestiones limitadas para capacitar a funcionarios policiales responsables de identificar víctimas e investigar casos. Observadores indicaron que los funcionarios policiales no siguieron procedimientos sistemáticos para identificar víctimas de manera proactiva, pero demostraron una mayor comprensión de la irrelevancia del consentimiento inicial. Funcionarios uruguayos colaboraron con un gobierno extranjero para arrestar a una persona acusada de retribuir a un menor para que ejecutara actos sexuales comerciales. El gobierno dictó algunas capacitaciones para fortalecer las capacidades de los funcionarios policiales y aduaneros para identificar víctimas.

PROTECCIÓN

El gobierno mantuvo su trabajo de protección. En 2019, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ayudó a 83 víctimas recientemente identificadas, la mayoría de las cuales eran extranjeras. No quedó claro qué institución identificó a esas víctimas ni cuántas de ellas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual o de trabajo forzado. En comparación, se identificaron 95 víctimas en 2018. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó que monitoreó 240 casos de trata infantil con fines de explotación sexual pero no especificó cuántas víctimas estuvieron involucradas ni cuántos de esos casos eran nuevos en 2019. El gobierno contó con varios protocolos de protección a las víctimas y mecanismos de

derivación escritos sobre asistencia a las víctimas. El MIDES fue el principal proveedor de servicios para víctimas, pero no existieron en Uruguay servicios especializados para víctimas de trata. El INAU estuvo a cargo de asistir a víctimas infantiles y adolescentes. La sociedad civil y organismos del gobierno trabajaron conjuntamente para brindar servicios a víctimas de sexo femenino. Sin embargo, el gobierno prestó servicios a víctimas masculinas y LGBTI caso a caso, y algunas organizaciones expresaron preocupación por la falta de formalidad en la derivación de víctimas. El gobierno tuvo un sistema de respuesta interinstitucional que estableció una ruta de derivación para casos de trata. El gobierno y la sociedad civil siguieron operando un equipo móvil con 14 integrantes que incluyó psicólogos, trabajadores sociales y abogados y respondió a casos que se dieron en el interior del país. Durante el período del informe, el INAU creó un programa para hasta 20 víctimas infantiles y adolescentes. El MIDES inauguró un segundo centro de asistencia a víctimas en 2019, donde prestó servicios a 21 víctimas de sexo femenino durante el período del informe. El Ministerio de Salud Pública capacitó a 2.500 profesionales de la salud sobre nuevos protocolos para tratar a posibles víctimas de violencia basada en género, que incluye la trata de personas. El gobierno proporcionó locales y asistencia técnica y permitió que el personal asistiera a capacitaciones sobre identificación y asistencia a víctimas que dictó un organismo internacional. El gobierno contrató a ONG para ofrecer a las víctimas servicios similares a aquellos que se brindan a otras poblaciones vulnerables (indigentes, refugiados y ciudadanos que reciben subsidios estatales). No hubo servicios especializados para víctimas de trata. Funcionarios del gobierno tuvieron algunas instalaciones que pudieron alojar temporalmente a las víctimas. Sin embargo, la sociedad civil expresó preocupaciones sobre la idoneidad de dichas instalaciones, ya que no cubrían las necesidades de las víctimas de trata. La sociedad civil informó que existieron dificultades para encontrar refugio para víctimas de trata, en especial para aquellas que fueron identificadas fuera de la capital. Observadores identificaron la necesidad de centros diurnos y programas para víctimas que se quedan en refugios nocturnos. La sociedad civil informó que los servicios del gobierno se centraron principalmente en asistencia psicosocial y legal, pero que los servicios a largo plazo (como vivienda, apoyo vocacional y asignación laboral) fueron insuficientes. El gobierno no informó sobre su financiación para protección y asistencia a víctimas. Aunque el gobierno tuvo un protocolo para brindar medidas de seguridad y protección a las víctimas, los observadores informaron que el gobierno no garantizó la seguridad física de las víctimas, y que el miedo a las represalias evitó que las víctimas participaran en juicios contra sus tratantes. Las víctimas podrían presentar demandas civiles para recibir un resarcimiento de parte de sus tratantes, pero el gobierno no informó si hubo alguna víctima que lo hiciera en 2019. Las víctimas extranjeras tuvieron el derecho a obtener permisos de trabajo y residencia permanente, y contaron con un período de reflexión de hasta 180 días para decidir si deseaban permanecer en el país, regresar a su país de origen o reasentarse en otro país. Sin embargo, el gobierno no informó si emitió algún permiso de trabajo a alguna víctima extranjera durante el período del informe.

PREVENCIÓN

Hubo un ligero incremento en las tareas de prevención del gobierno. El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas (formado por participantes de alto nivel y liderado por el MIDES) y sus grupos de trabajo se reunieron con frecuencia durante el período del informe. El Consejo estuvo a cargo de la implementación de las recomendaciones recibidas de organismos internacionales y de la supervisión institucional de la aplicación de la

Ley N.º 19.643 y del plan de acción nacional 2018-2020. Dicho Consejo llevó adelante una revisión anual de su trabajo contra la trata de personas, que fue hecho público durante un evento por el Día Mundial contra la Trata. El gobierno no asignó fondos para aplicar la ley de trata ni el plan de acción nacional, y el Consejo Nacional no contó con un presupuesto para funcionar. El gobierno distribuyó material informativo donde se indicaba al público cómo identificar y denunciar casos de trata. Organismos del gobierno llevaron adelante campañas de sensibilización que alcanzaron a más de 800 personas a través de talleres, seminarios, medios sociales, medios impresos y transmisiones radiales. El gobierno atendió una línea directa gratuita que funciona las 24 horas que deriva a las víctimas a la Policía o al MIDES. El gobierno no informó cuántas llamadas estuvieron relacionadas con casos de trata. El MIDES lanzó una versión de la línea directa en una aplicación para teléfonos celulares para promover su uso entre el público más joven. Los inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibieron capacitación para identificar indicadores de trata con fines de explotación laboral y llevaron adelante inspecciones de trabajo frecuentes, incluso en establecimientos conocidos por facilitar actos sexuales comerciales, pero no contaron con procedimientos específicos para identificar casos de trata. El gobierno tomó los primeros pasos para evaluar la vulnerabilidad a la trata con fines de explotación sexual en comunidades cercanas a un complejo industrial nuevo y alentó a sus desarrolladores a aprobar un código de ética contra la trata. El gobierno trabajó para prevenir el turismo sexual infantil, pero no para reducir la demanda de actos sexuales comerciales. El gobierno y una ONG trabajaron conjuntamente en una campaña de sensibilización para evitar el turismo sexual infantil en destinos turísticos populares.

PERFIL DE TRATA DE PERSONAS

Tal como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior. Las mujeres y niñas uruguayas (y, en menor grado, los adultos transgénero y los varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Los tratantes obligan a mujeres y personas LGBTI uruguayas a practicar actos sexuales comerciales en España, Italia, Argentina y Brasil. Los tratantes explotan a mujeres provenientes de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, mujeres de otros países sudamericanos, en la trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Trabajadores extranjeros, principalmente provenientes de Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Paraguay y Argentina, son sometidos a trabajo forzado en la construcción, el servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Los tratantes explotaron a inmigrantes cubanos en la trata con fines de explotación sexual en ciudades fronterizas. Desde el año 2013, se ha asociado un promedio de un tripulante fallecido por mes con buques pesqueros con bandera de Taiwán y China que están atracados en el puerto de Montevideo y navegando en aguas uruguayas. Los trabajadores extranjeros que están a bordo de estos buques son sometidos a abusos que sugieren trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, documentos de identificación confiscados y abuso físico. Hay denuncias informales de homicidios en altamar. Ciudadanos de otros países, incluidos China y la República Dominicana, pueden estar en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, particularmente Argentina. Los trabajadores domésticos empleados en el interior del país, una zona menos monitoreada, tienen un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas.